



**Dirección General
de Sanidad de la
Producción Agraria**

OFICIO

N/REF: Expediente: 001-073228

FECHA: Fecha de firma electrónica

ASUNTO: Importación y exportación de aceite de palma

DESTINATARIO:

CORREO ELECTRÓNICO:

Con fecha 25 de octubre de 2022 tuvo entrada en la Unidad de Información de Transparencia (UIT) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), solicitud de información formulada al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIPBG), por **D.** que quedó registrada con el número **073228**, en la que solicita en concreto la siguiente información:

“ , mayor de edad, identificado con pasaporte italiano N° en el ejercicio de la función de Presidente del **CENTER FOR CLIMATE CRIME ANALYSIS (CCCCA)**, con domicilio establecido en Trompstraat 318, 2518BS, La Haya (Países Bajos), me dirijo respetuosamente a ustedes a fin de hacer uso del DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA de acuerdo a lo consagrado en el artículo 105.b) de la Constitución Española y la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, con base a los argumentos de hechos y derecho que se expondrán a continuación:

I. HECHOS

CCCA es una organización sin ánimo de lucro con sede en los Países Bajos, formada por abogados/as, investigadores/as, y analistas con experiencia en procedimientos nacionales e internacionales. Su objetivo es apoyar y potenciar el trabajo de organismos encargados del cumplimiento de la ley a nivel nacional e internacional llevando a cabo análisis legales, forenses y de imágenes satelitales con información proveniente de fuentes abiertas y plataformas de búsqueda privada. En ese contexto, CCCA viene desarrollando un proyecto que implica el análisis de algunas cadenas de suministro de la industria alimentaria que tienen un impacto en la deforestación y, entre ellas, de la industria de palma aceitera. Por lo tanto, el acceso a la información objeto de la presente SOLICITUD resulta necesaria para el cumplimiento del mandato de investigación y análisis de CCCA.

Por las consideraciones anteriores, presento a ustedes las siguientes peticiones:

II. PETICIONES

PRIMERO: Se entregue la información sobre las importaciones de aceite de palma, crudo y refinado, entre el 2016 al 2022 por cada

Comunidad Autónoma de España, incluyendo:

- Razón social de la empresa importadora y de la empresa exportadora.
- Ubicación geográfica de la empresa importadora y de la empresa exportadora.
- Fecha de importación.
- País de origen de la importación.
- Cantidad de aceite de palma importado.
- Puertos de cargas y descargas.

- *Cualquier otra información relevante.*

SEGUNDO: Se entregue la información sobre las exportaciones de aceite de palma, crudo y refinado, entre el 2016 al 2022 por cada

Comunidad Autónoma de España, incluyendo:

- *Razón social de la empresa exportadora y de la empresa importadora.*
- *Ubicación geográfica de la empresa exportadora y de la empresa importadora.*
- *Fecha de exportación.*
- *País de destino de la exportación.*
- *Cantidad de aceite de palma exportado.*
- *Puertos de cargas y descargas.*
- *Cualquier otra información relevante.*

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO

La presente SOLICITUD se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 105.b) de la Constitución Española y la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Sin otro particular, quedo atento a la respuesta de la presente, la cual deberá ser resuelta dentro de los términos dispuestos en la Ley 19/2013.

IV. NOTIFICACIONES

Solicito respetuosamente que la respuesta a la presente SOLICITUD se realice al siguiente correo electrónico: colper@climatecrimeanalysis.org. En caso de que la información requerida supere los 25 MB, se solicita tenga a bien informar por correo electrónico a colper@climatecrimeanalysis.org a fin de coordinar la entrega personalmente en formato digital (DVD/USB) con un representante de CCCA en el territorio de España."

Tras el análisis de la solicitud, la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, resuelve **conceder parcialmente el acceso** a la información, en aplicación de los artículos **18.1.c) y 14.1.h)** de la LTAIBG, con los detalles que se explican a continuación:

a) **Exportaciones** (de acuerdo con los datos correspondientes a la inspección veterinaria en los Puestos de Control Fronterizo); no constan.

b) **Importaciones:** en función de los datos obrantes en las bases de datos, constan desde 2017 hasta 2022, se acompaña Excel al respecto.

Respecto de los datos correspondientes a 2016, y, en todo caso, en las **importaciones**, al no existir una consulta informática automática, debería realizarse una acción previa de reelaboración para comunicar la información relativa a cada Comunidad Autónoma de España, incluyendo razón social de la empresa importadora y de la empresa exportadora., ubicación geográfica de la empresa importadora y de la empresa exportadora, fecha de importación, puertos de cargas y descargas, y cualquier otra información relevante. Por ello, se inadmite la misma en dicho aspecto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.1.c) de la LTAIBG. Al considerar la pertinencia de aplicar la causa de inadmisión de acción previa de reelaboración a los casos concretos, hay que partir del presupuesto al que hizo referencia el Tribunal Supremo en la Sentencia nº 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, Fundamento de derecho cuarto): «Cualquier pronunciamiento sobre las "causas de inadmisión" que se enumeran en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y, en particular, sobre la prevista en el apartado 1.c) de dicho artículo (que se refiere a solicitudes "relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración") debe tomar como premisa la formulación amplia y expansiva con la que aparece configurado el derecho de acceso a la información en la Ley 19/2013», extractando la misma respecto del período temporal solicitado, y estructurándola en los diversos apartados solicitados, lo que supondría elaborar un informe ad hoc, con el consiguiente coste en personal y servicios, sin que se refiera la solicitud al uso de recursos públicos. Así, a día de hoy, no existe el listado solicitado, por lo que tendría que ser elaborado expresamente.

Ello queda justificado, asimismo, por la aplicación del Criterio 7/2015 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sobre solicitudes de información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración, siendo conforme a lo indicado anteriormente por el Tribunal Supremo en

cuanto a que la aplicación de una causa de inadmisión ha de ser debidamente justificada y argumentada. En efecto, cabe afirmar que para proporcionar la relación solicitada sería necesario revisar la documentación obrante en los registros de este Ministerio y elaborar los listados solicitados, filtrando (eliminando) los datos personales, etc., así como los supuestos de trasbordo (en los que el destino final no es España) y agrupando después el resto de los datos según mes, provincia, etc., con el consiguiente coste. Esta labor supondría una carga de trabajo desproporcionada, que, además, tendría como consecuencia que las tareas habituales del personal de esta unidad que gestiona las importaciones quedasen paralizadas.

Asimismo, en las **importaciones**, de acuerdo con el artículo 14.1.h) de la citada Ley, se limita el acceso respecto de la identificación de la dirección de destino de los envíos por afectar a los intereses económicos y comerciales de las empresas interesadas, dado que proporcionar la dirección de las citadas empresas supondría el eventual conocimiento por parte de los competidores de su posición en el tracto comercial del referido producto. Ello es congruente con el criterio interpretativo 1/2019, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), pues el Diccionario del Español Jurídico de la RAE¹² en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según el cual “interés” sería “aquello que conviene o tiene importancia para una persona, grupo o entidad”; “económico” será “aquello que tiene que ver con la economía” -esto es, con la “ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios”, o la “actividad económica” -esto es, “toda aquélla realizada con ocasión de una actividad de índole económica, un negocio o una empresa, con independencia de su carácter público o privado y de que tenga o no fines lucrativos”- y, finalmente “comercial”, “aquello que tiene que ver con el comercio”, esto es, con “cualquier negociación que se hace permutando géneros o mercancías”. En fin, parece claro que dar los datos solicitados respecto de las empresas importadoras, afectarían a su posición en el tracto mercantil, o a su propia actividad comercial o mercantil, respecto de posibles competidores.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el órgano judicial competente (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.

Madrid, fecha de firma electrónica.
EL DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD
DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA,
Valentín Almansa Lara.